

Estudios sobre participación

Procesos, sujetos y contextos

Pérez Rubio, Ana María
Oraisón, Mercedes
(Coordinadoras)

Barbetti, Pablo
Benítez, Andrea
González Foutel, Laura
Nuñez, Cyntia
Oraisón, Mercedes
Pérez Rubio, Ana María



ESTUDIOS SOBRE PARTICIPACIÓN
Procesos, sujetos y contextos

Ana María Pérez Rubio
Mercedez Oraisón
(Coordinadoras)

Estudios sobre participación : procesos, sujetos y contextos /
Ana María Pérez Rubio ... [et.al.] ; compilado por Ana María Pérez
Rubio y María Mercedes Oraison. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires :
Estudios Sociológicos Editora; Corrientes: Universidad Nacional del
Nordeste, 2013.
E-Book.

ISBN 978-987-28861-7-2

1. Sociología. 2. Participación Política. I. Pérez Rubio, Ana Ma-
ría II. Pérez Rubio, Ana María, comp. III. Oraison, María Mercedes,
comp.
CDD 303.4

Fecha de catalogación: 11/10/2013

Diagramación: Carla Blanco

© 2013 Estudios Sociológicos Editora
Mail: editorial@estudiossociologicos.com.ar
Sitio Web: www.estudiossociologicos.com.ar

Primera edición: octubre de 2013.
Hecho el depósito que establece la Ley 11723.
Libro de edición argentina.

“El presente libro puede ser descargado desde el sitio web de nuestra editorial.”

ESTUDIOS SOBRE PARTICIPACIÓN

Procesos, sujetos y contextos

Ana María Pérez Rubio
Mercedes Oraisón
(Coordinadoras)

Pablo Barbetti
Andrea Benítez
Laura González Foutel
Cynthia Nuñez
Mercedes Orainsó
Ana María Pérez Rubio

Estudios Sociológicos Editora:

Estudios Sociológicos Editora es un emprendimiento de Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) pensado para la edición, publicación y difusión de trabajos de Ciencias Sociales en soporte digital. Como una apuesta por democratizar el acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías, nuestra editorial apunta a la difusión de obras por canales y soportes no convencionales. Ello con la finalidad de hacer de Internet y de la edición digital de textos, medios para acercar a lectores de todo el mundo a escritos de producción local con calidad académica.

Comité Editorial / Referato

–Graciela Magallanes (Directora de Estudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos –GESSYCO– y docente de la Universidad Nacional de Villa María. Directora de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social -RELMIS-)

–Angélica De Sena (Dra. En Ciencias Sociales - UBA; Docente de la Universidad de Buenos Aires; Directora de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social - RELMIS).

–Ana Lucía Cervio (Dra. en Ciencias Sociales - UBA; Investigadora Asistente CONICET)

A María del Socorro Foio, amiga y compañera en la tarea de investigar la realidad social de la región, por su valiosa colaboración en la lectura de este manuscrito y los sugestivos comentarios aportados.

Índice

Prólogo, por <i>Alberto L. Bialakowsky</i>	11
Introducción	19
La participación como herramienta de politización de la desigualdad Maria Andrea Benítez	25
Participación ciudadana y organizaciones comunitarias: espacios, prácticas y posicionamientos políticos Mercedes Oraisón	47
Acción colectiva, construcción de espacio público y participación Laura González Foutel	67
Juventudes y participación. La promoción de la participación social y política de los jóvenes desde el Estado. Reflexiones a partir de experiencias recientes en la provincia del Chaco Pablo Barbetti	87
El discurso de la participación en la sociedad contemporánea Ana María Pérez Rubio	109
Participación, capital social y MTD. Entre la compensación y la institucionalización política Cynthia Nuñez	121
Acerca de los autores	139

Participación, capital social y MTD. Entre la compensación y la institucionalización política

Cyntia Nuñez

Introducción

Los movimientos de desocupados han sido analizados como organizaciones socio-políticas (MASSETTI, 2009) dentro del universo “piquetero”. Esta denominación alude a “*un constructo simbólico cuya principal utilidad es enmarcar la acción de protesta*” (MASSETTI, 2009), pero que sirve a los fines periodísticos y de las ciencias sociales para identificar a un actor social que comparte rasgos como la estrategia de acción colectiva o el desempleo, aunque sus trayectorias y experiencias laborales o actividades de trabajo hayan sido diversas, haciendo de la *heterogeneidad* (SVAMPA y PEREYRA, 2009) una característica propia de estas organizaciones. La identidad piquetera se consagra luego de 2001 con una fuerte carga normativa a partir de la cual el piquete se comprende como instancia de reclamo y reivindicación pública de derechos no alcanzados y como elemento integrador constitutivo de esa identidad (LENGUITA 2002. En: FERRAUDI CURTO, 2007).

Diversos grupos se han movilizado para defender su lugar de trabajadores, especialmente a partir de la segunda mitad de la década de los 90. PEREYRA y SCHUSTER (2001) reconocen estas protestas dentro de la “matriz sindical”, es decir que los reclamos que se realizaban tenían que ver con la defensa de las condiciones salariales y el rechazo de las políticas de gobierno y posteriormente con la defensa del empleo frente a la amenazante privatización y al inminente achique del Estado.

Con el tiempo los sujetos movilizados —entre una variedad de movimientos sociales, entre ellos los MTD (movimiento de trabajadores desocupados)— se endurecieron y consolidaron su organización frente a los gobiernos. Lejos de responder solo a la coyuntura, la consagración de estos movimientos da cuenta de cuestiones que aún no se resuelven —como el desempleo, ejemplo sublime—, pero además, de una posibilidad y una capacidad de los sujetos para organizarse, movilizarse y enfrentar al poder político.

Estos movimientos han logrado un fuerte desarrollo organizativo y gran protagonismo en el ámbito de la política social, como gestores de ella. La organización y la participación de los sujetos juegan un rol importante dado que sirven de soporte no

solo a la consecución de sus objetivos más inmediatos, sino que además colaboran en la construcción de una noción de ciudadanía activa. En tal sentido, me propongo analizar en un caso particular, los MTD de la provincia del Chaco¹, los procesos participativos —fundamentalmente desde la óptica de la participación pública y política—, entendiendo que atraviesan de modo transversal a las organizaciones.

Para el análisis de los MTD se han utilizado entrevistas a los integrantes de diferentes movimientos (principalmente MTD 17 de Julio, Emerenciano y MIDJ-Mecha), así como información de prensa, intentando con ello reconstruir el campo de movimientos sociales en la provincia. En esta ocasión, esta información ha servido para ejemplificar o legitimar el análisis con recortes o partes de entrevistas realizadas en el año 2010.

Dada su larga trayectoria en la provincia, las organizaciones han podido cultivar una experiencia que ha sido reformulada algunas veces, pero que, finalmente, los posiciona ante el gobierno con argumentos críticos y aporta al mismo tiempo elementos para un análisis crítico del campo popular y a la discusión.

Sobre la participación

El concepto participación es un término ambiguo. Su uso es tan corriente que pierde especificidad, y es preciso dotarlo de ella mediante su explicitación. Comúnmente, se entiende que “participar” es, en sus dos acepciones castellanas (ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, s/f), formar parte o tener parte de algo o comunicar, y hacer partícipe a alguien de algo. Desde esta mirada podemos considerar participativa toda clase de intercambio en diversos ámbitos de acción, que incluyen desde lazos mercantiles (de lucro) o dentro de instituciones burocráticas, como no mercantiles —que comprenden a formas de asociaciones de reciprocidad— (ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, s/f).

La participación en tanto relación social comprende a la constitución de los individuos, pues no sería posible no participar. Esta mirada pronunciada por MARITZA MONTERO (2006), desde la psicología social, enfatiza la necesidad de orientar el estudio desde la perspectiva de los “oprimidos” y no desde del hombre promedio, y trabajar para que los sujetos del estudio, empleando sus capacidades y potencialidades, adquieran conciencia y control sobre sus vidas y circunstancias vitales (PÉREZ, 2010).

1. La provincia del Chaco se encuentra al noreste de la República Argentina; su capital es la ciudad de Resistencia. 1.053.466 es el número total de habitantes (según el INDEC, 2010); cuenta con 25 departamentos, de los cuales San Fernando es el más importante (alberga la capital y cuenta con 390.854 habitantes [INDEC 2010]). De la población de 10 o más, el 5,5 % es analfabeto, lo que coloca a la provincia entre las de mayor índice a nivel país. Como parte de la región noreste se reconoce como la segunda provincia con más altos índices de pobreza e indigencia, una cuestión que se contradice con los últimos números del INDEC, que colocan a la región del Gran Resistencia (Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas) con el 0,4 % de desocupación, una condición que anuncia pleno empleo. La ocupación en la zona está altamente lograda por los empleos en la administración estatal y municipal, como por la enorme cantidad de planes sociales.

A partir de esta concepción de la participación se entiende que puede ser asociada al cambio social y a las posibilidades de inclusión social por parte de un sector de la ciudadanía, vulnerable y excluido. En el interior de este planteo se pueden reconocer dos posturas diferenciadas: una asociada con los procesos de adaptación y la construcción de capital social; y otra que considera la participación como estrategia metodológica para el cambio social (PÉREZ, 2010).

Se reconocen diversas maneras de participar yendo desde lo individual hasta lo grupal y desde el sufragio hasta la conformación de asambleas (como un ideal de democracia directa). En estos términos, los movimientos sociales pueden ser pensados —de hecho, lo son— como espacios de participación política, dado que congregan a las personas a partir de su posición de ciudadanos para discutir sobre asuntos que atañen a muchos y desde los cuales se desarrollan propuestas de transformación o intervención. Sin embargo, apelan a formas de identificación (mujeres, desocupados, indígenas) y participación grupal para articularse en una organización que excede a la lógica del sistema político, el cual restringe las posibilidades de demanda en términos de ciudadanos (individuales). Interpelan a los gobiernos, buscan despertar a la sociedad en el diálogo y promover una participación fluida.

En términos de políticas sociales, el concepto ha sido resignificado y utilizado para convocar a los sujetos a la actividad pública, considerando una idea de construcción política conjunta para el beneficio de su comunidad. En este sentido, se comprende a la participación como una herramienta por excelencia para el compromiso ciudadano, dado que los sujetos se involucrarían allí donde pueden hacerse oír, y por ende donde puede involucrarse y decidir.

Movimientos Sociales y de Trabajadores Desocupados en la provincia del Chaco

En la provincia del Chaco conviven hace bastante tiempo numerosas organizaciones sociales, que dada la crisis económica y social de 2001 se han ido reproduciendo durante estos más de diez años. Si bien en el año 2000 los movimientos sociales de trabajadores desocupados no eran una novedad en el país, en esta provincia empezaron a tener notoriedad en esa época. Debido a la gran inundación que azotó la segunda localidad más importante, Barranqueras, numerosos afectados —pertenecientes a diversos sectores sociales— protestaron y se organizaron para obtener los subsidios de rescate al desastre natural. Entre ellos se encontraban personas desocupadas o subocupadas que se vieron fuertemente desfavorecidas, dado que no contaban con recursos para reparar los grandes daños y sus consecuencias posteriores.

Los reclamos pasaron de estar dirigidos a la obtención de subsidios para los inundados, sino también por trabajo a quienes no lo tenían. Se formó el Movimiento General San Martín, que nucleaba a los afectados por la inundación y a los desocupados

(al cual se unieron vecinos de Resistencia, ciudad capital). Con el tiempo, la obtención de los subsidios se produjo, pero quienes más lo necesitaban no consiguieron este beneficio. La formación se fue desintegrando, quienes no necesitaron más se alejaron, quedaron solo los desocupados —además de otras cuestiones internas de quienes lo lideraban— y la agrupación se escindió conformando un Frente de Liberación y Lucha, el cual luego de una fuerte represión policial en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno de la provincia, y en razón de la exposición del “rancho de la dignidad”², pasó a llamarse MTD 17 de Julio (fecha del enfrentamiento).

Esta organización ha visto modificarse el escenario político y social cientos de veces, ella misma ha sido muchas veces reorganizada, ya que hace algunos pocos años —por razones de funcionamiento interno y liderazgo— se marcó otro momento de ruptura. Emerenciano Sena —ahora líder del movimiento que lleva su nombre— se separa del grupo original, y con él muchos otros integrantes formaron su propia agrupación. De este modo, ambas organizaciones dan vida a otras que son lideradas por integrantes anteriores, pero que colaboran con la primera, estableciendo grupos paralelos.

El campo de los movimientos sociales se ha diversificado enormemente; sin embargo, la mayoría acuerda reconocerse como MTD. Como los movimientos sociales no necesitan registrarse formalmente, es difícil hacer un conteo exhaustivo de ellos, y en ocasiones sucede que aparecen sus pancartas en alguna marcha, pero luego ya no se sabe de ellos o cuentan con muy pocos integrantes, o tienen escasa incidencia en la opinión pública local (son algunas de las razones que se pueden dar). En un intento por caracterizar el campo³, he registrado unas 32 organizaciones sociales que se refieren a movimientos sociales propiamente dichos, de los cuales quince se denominan Movimiento de Trabajadores Desocupados y llevan la sigla antecedendo su nombre; asimismo, doce⁴ agrupaciones del total pertenecen o han pertenecido a movimientos sociales (en la mayoría de los casos no MTD) de alcance nacional, como ejemplo digo: Barrios de Pie, Polo Obrero, o MCC y

2. “El “rancho de la dignidad”, como fue conocida la carpa, funcionó como lugar de concentración de manifestantes de diversos sectores. El 17 de julio de 2000, cuando el movimiento se manifestaba frente a la Casa de Gobierno en reclamo del pago de los puestos de trabajo, se desató una represión policial que incluyó disparos con armas de fuego. Los desocupados enfrentaron a las fuerzas de seguridad, pero no pudieron impedir que el “rancho de la dignidad” fuera desarmado. Este episodio, posteriormente transformado en hito histórico del Movimiento de Trabajadores Desocupados del Chaco, produjo tuvo dos importantes consecuencias: por un lado, afectó internamente al MTD General San Martín y derivó en su división; por otro lado, otorgó visibilidad nacional a la organización, permitiendo el contacto con grupos similares de Buenos Aires, y precedió al otorgamiento masivo de subsidios por desempleo, todo lo cual redundó en un crecimiento del Movimiento en su conjunto. ROMAN, 2010.

3. Este es un registro no exhaustivo, dado que se reconoce la posibilidad de organizaciones al interior de la provincia de las cuales no se tienen registros. Sin embargo, la tendencia presentada es fuerte y probablemente no se modifiquen sustancialmente los datos alcanzados.

4. Las cuatro restantes son movimientos originarios más uno del que no se tiene conocimiento como “movimiento solidaridad CUBA”, el cual parece no tratar el tema que nos compete.

MIJD-Mecha, que conservan parte del nombre pero que se independizaron de la agrupación central. Esta casi igualdad en número marca, de algún modo, la fuerte presencia de organizaciones formadas de modo independiente a los movimientos que podemos pensar más consolidados, dado su alcance nacional. Este dato me parece por demás relevante, si tenemos en cuenta que se trata de una provincia que no se encuentra entre las principales del país, pero sobre todo llama la atención que la provincia vecina, Corrientes, no cuente con tan altos registros de organizaciones populares autónomas. Al contrario, sus formaciones se asocian casi directamente con agrupaciones de orden nacional⁵.

Los MTD con más trayectoria —los cuales son reconocidos como “fundadores” de la modalidad piquetera en la provincia— poseen un grado de organicidad que podemos considerar alto. Esto porque, en general:

1. mantienen una estructura fija de roles y funciones (con presencia de dirigente, secretario, tesorero, delegados);
2. funcionan y se expanden por medio de la formación de delegaciones (por zonas, barrios o localidades al interior de la provincia);
3. se utilizan la asamblea y el sufragio para tomar decisiones;
4. son representados por un líder nato, a quien se consulta inevitablemente;
5. poseen, por lo general, tareas definidas (que hacen a la coordinación del grupo) y otras que se presentan según la coyuntura;
6. son reconocidos según áreas de influencia (se identifican por barrios o localidades) y
7. establecen relaciones con instituciones, gremios, empresas, sean estas privadas o públicas, así como con otros movimientos (tanto a nivel nacional como en el interior de las provincias).

Los que más participación en el escenario público registran son los MTD establecidos en la ciudad capital; estos movilizan a un gran número de personas, movimientos y asociaciones. El conteo de actividades que se realizan en forma pública va desde los ya clásicos piquetes (en sus diversas variantes), hasta anuncios y propuestas abiertas. Los movimientos se han organizado al punto de superar el reclamo de puestos de trabajo (que aún siguen buscando) orientándose hacia una participación cada vez más activa en los asuntos públicos que competen a toda la ciudadanía, incorporándose a la agenda del gobierno como actores a los cuales recurrir pues tienen acceso directo, o representando a diversos y numerosos sectores sociales, social y económicamente desfavorecidos. En tanto directos delegados de los más humildes, como frecuentemente lo son ellos mismos, establecen vínculos entre movimientos, con organizaciones/instituciones públicas o privadas y con sindicatos de acceso nacional, a fin de aprender, capacitarse, vincularse con otras organizaciones y conformarse como una fuerza política en ascenso y organizada.

5. En referencia a movimientos sociales populares y no a asociaciones, fundaciones, partidos políticos u ONG.

Políticas sociales, participación y exclusión

Con base en el estudio de la Exclusión Social, SARAVÍ (2006) encuentra que América Latina se caracteriza por presentar tres rasgos significativos. Desde una perspectiva histórica, se entiende que la pobreza estructural se endurece y permea en la gente generaciones tras generaciones, quitándoles el optimismo y profundizando las desventajas; en segundo lugar, es posible ver un foco de marginalidad en grandes urbes de concentración; por último, se denota una ciudadanía de segundo grado —diferenciaciones generadas desde el Estado focalizado— que provoca una devaluación de la calidad de los servicios prestados.

En este marco, la reforma neoliberal significó por parte de los estados el desarrollo de programas para regular y administrar la pobreza, no para erradicarla. Como lo reconoce SANTIAGO (2010), actualmente las políticas sociales se fundamentan en acciones que proponen estimular confianza, cooperación o asociatividad, para ser aplicadas, casi exclusivamente, en barrios y comunidades consideradas pobres y donde residen sujetos excluidos. Las propuestas instaladas por organismos internacionales suponen que el “refuerzo del capital social” favorecerá el tejido asociativo de una comunidad permitiendo a los sujetos generar y mantener su propio sustento y la solución de sus vidas cotidianas con la mínima intervención del Estado. En este intento de compensar la relación de los sectores empobrecidos con el mercado, se supone la promoción de capacidades de autogestión a través de redes comunitarias y trabajo —que a fin de cuentas es informal—, como la salida de un estado de indefensión que más que solucionar mantiene a las personas en su condición de pobreza. Las medidas se instalan en la posibilidad de la supervivencia de la población por sus propios medios, dejando a las poblaciones carenciadas la responsabilidad de su superación. Por lo tanto, las dificultades son vistas como problemas culturales y de determinados grupos o tipos de individuos y no como una cuestión estructural. De este modo, *“la participación deviene un instrumento o procedimiento que contribuye a ejercer cierto control en la gestión del gobierno o bien lograr una cierta influencia en la toma de decisiones, aun cuando no necesariamente esta última posibilidad se verifique plenamente”* (PÉREZ, 2010).

Abogar por la participación como concepto contiene el riesgo de ser utilizada —dada su carga valorativa altamente positiva— como un fin en sí mismo, pero, cuando sus prácticas se alejan de las posibilidades de generar verdaderas experiencias participativas, con consecuencias más cercanas a la heteronomía que a la autonomía, el concepto oculta las desigualdades y permite el mantenimiento de un consenso acrítico. Esta postura evita que las personas pongan en cuestión las medidas y que no se discuta, por ejemplo, sobre la distribución de la riqueza como tema de fondo de las desigualdades (SANTIAGO, 2010).

El cambio de modelo de la organización estatal hacia un tipo neoliberal caracterizado por la privatización, la descentralización y la focalización modificó el modo de entender y de enfrentar la pobreza. Como lo analiza SANTIAGO (2010), este cambio

significó la implementación de una estrategia que intenta captar a los sujetos en riesgo en ámbitos localizados a fin de incluirlos en los moldes técnicos de una población objeto, brindando formas sustitutivas al empleo asalariado a bajo costo.

Estas consecuencias son también analizadas por MERKLEN (2005), quien encuentra que, en la década del 80 y 90, cuando los hombres y mujeres pierden paulatinamente sus puestos de empleo, pierden también sus lazos de afiliación. Los análisis por parte de los intelectuales de la época, como de los organismos internacionales, proponen una mirada que deja de observar a los sujetos como trabajadores para ser vistos como “pobres”. Esto significó la construcción de la “cuestión social” en términos de pobreza; por lo tanto, la atención del sector pasó a ser compensatoria, y a considerar una nueva institucionalización del papel del Estado en relación con las clases populares. La focalización de las políticas sociales para la atención de los más necesitados se promulgó como la estrategia más acorde para enfrentar la situación, desmembrando la condición de pobreza como constituida por diversos problemas que el sector enfrenta. Por lo tanto, las políticas de atención se dividen en programas que intentan intervenir en cuestiones como la salud, la educación, la juventud, etc. mediante temas específicos que atraviesan el mundo de la pobreza. Esta fragmentación institucional se acompañó de la descentralización que significó la transferencia de las responsabilidades estatales a las esferas de gobierno local, como los municipios. Los “resultados” de los primeros períodos de implementación, arrojan según MERKLEN (2005) consecuencias positivas —en términos cuantitativos—, en cuanto se observaba un crecimiento de la participación de las poblaciones objeto de las políticas sociales.

Sin embargo, la forma que toma la participación dentro de estas políticas se denota segmentada y local. Al no haber modo/instancia de afiliación formal en la condición de trabajadores, la participación deja de entenderse como la posibilidad de discusión de condiciones laborales, como por ejemplo se da a través del sindicato, para pasar a referirse a la implicación a escala local de las poblaciones antes identificadas y definidas como objetivo (MERKLEN, 2005) en el contexto de su territorio.

La focalización de las políticas en el territorio propició un tipo de participación que se asienta en la idea de autogestión, que se auspicia mediante una consideración del sujeto como ciudadano, pero que en definitiva sostiene intervenciones que son fuertemente asistenciales. O como lo reconocen ANDRENACCI y SOLDANO (2006): *“la nueva institucionalidad circunscribió las políticas contra la pobreza a una oferta creciente de programas focalizados —primero ineficientes— a la hora de reintegrar sujetos”*.

Sin embargo, y pese a que las políticas neoliberales han sido ampliamente analizadas y cuestionadas por la lógica de desafiliación y reproducción de desigualdades que las sostiene, es posible ver cómo diversas experiencias permiten pensar en horizontes alternativos que potencian una forma renovada de ciudadanía, donde los movimientos sociales juegan un papel importante en tanto colectivos que interpelan a los gobiernos.

Políticas sociales y capitales sociales (tipos)

El reconocimiento del capital social de los sujetos en situación de pobreza ha sido una posibilidad que desde las políticas neoliberales se ha tenido en cuenta para promover la implementación de planes y programas tendientes a la resignificación del territorio y de la comunidad de estas personas, lo que les permitiría resolver fallas del mercado sin necesidad de intervención estatal. Estas conceptualizaciones entienden el capital social como herramienta de lucha contra la pobreza; en este sentido, el concepto integra elementos como reciprocidad, formación de redes sociales, desarrollo participativo y gobernabilidad.

El concepto de capital social ha sido, al mismo tiempo, objeto de disputa; en él se afirman tanto potencialidades negativas como positivas. El punto de inflexión se da en lo que se obtiene de él (o mejor aun, lo que se pretende de él). Al respecto, se reconocen (SANTIAGO, 2010; KESLER y ROGGI, 2005) tres tipos de capital social, según los objetivos que se persigan en la implementación de las políticas sociales.

1. El capital social comunitario: caracterizado por los fuertes lazos entre personas cercanas, por proximidad física —porque son del mismo barrio— o por compartir características sociales similares. Este tipo de capital tendría el inconveniente de involucrar a pocas personas y solo a las que estén muy cerca; pero también facilitaría formas de reciprocidad. En el mismo sentido, la implementación de políticas sociales con esta lógica permitiría aliviar la pobreza pero no erradicarla.
2. El capital social de puente: se refiere a lazos que conectan individuos de diferentes grupos que se implican en relaciones horizontales con personas en situación de poder o económica similar.
3. El capital social de escalera: supone relaciones entre actores de distinto grado de control y recursos verticales; entre hombres y mujeres de bajos ingresos y personas o grupos en posición de influencia en órganos formales. Facilitaría el acceso a esferas políticas o a recursos de agencias externas, por ejemplo.

Esta tipología se propuso en razón de las posibilidades de las personas para superar situaciones de pobreza. El capital social es entendido como un recurso de la comunidad que está constituido por normas, prácticas y relaciones interpersonales. BEBBINGTON (2005) asegura que el primer tipo de capital social ofrece acceso a formas de reciprocidad o a compartir recursos, pero es poco probable que signifique una acumulación importante en tanto los activos/recursos son igualmente escasos en el total de la comunidad. Los capitales sociales de puente y escalera, sin embargo, ofrecen —según BEBBINGTON— *“la posibilidad de acceder a recursos que existen fuera de la localidad o de las estructuras sociales locales, recursos de otro tipo y potencialmente de otro nivel. Por consiguiente, brindan a lo menos la posibilidad de acumulación de activos”*. Esta posibilidad promovería —o al menos se presta más a ello— la “superación de la pobreza”. Esta ca-

tegorización construida en el marco de proyectos de investigación para el desarrollo por parte de la CEPAL⁶ propone una mirada optimista sobre la participación y la promoción de capital social, considerando que las políticas sociales de reducción de la pobreza según los objetivos que persigan tienen la posibilidad de reducir la brecha de la pobreza; sin embargo, sin discutir sobre las desigualdades sociales y la inequitativa distribución de la riqueza, los alcances de estas políticas serán siempre de reparación.

Las políticas sociales que se encuentran en vigencia a nivel nacional se dividen, principalmente, en dos grandes ejes —según el sitio web oficial de desarrollo social de la nación— entre “familia” y “trabajo”. Las políticas sociales del primer eje apuntan a la integración familiar y comunitaria con medidas que van desde la alimentación a las actividades recreativas y deportivas, con atención especial sobre niños, adolescentes y adultos mayores (pensiones no retributivas). La atención de estas medidas está puesta sobre la población más vulnerable sin posibilidades de empleo, por lo que los subsidios no requieren contraprestación, aunque sí ciertos requisitos que permitan su calificación.

El segundo eje refiere al trabajo. Dentro de este se desarrollan planes que suponen el tratamiento de herramientas de promoción y de generación de trabajo a través de emprendimientos socio-productivos, precooperativos, mutuales y cooperativas⁷; para aquellas personas —individuales como asociadas— de sectores vulnerables para el desarrollo local y la integración comunitaria. Planes que se integran a esta propuesta son: ingreso social con trabajo (conocido como plan Argentina Trabaja), marca colectiva y el microcrédito. El primero de estos planes pretende un servicio o tarea, generalmente de afectación a la comunidad y su infraestructura urbana.

Un tercer eje es denominado Organización Social; allí se engloban estructuras como los CIC (centro de integración comunitaria), mesas de gestión y promotores territoriales. Con estas formaciones se busca establecer relaciones más cercanas, en tanto nexos, entre las instituciones, el gobierno y la comunidad. El interés reside en la promoción de espacios de integración y de resolución de asuntos compartidos por una comunidad, donde el trabajo en red se descubre como un ideal.

La provincia del Chaco es beneficiaria de estos planes por pertenecer a una región y luego a una provincia con altos índices de población con NBI. Los MTD de la provincia

6. “Este nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contiene una selección de estudios sobre el capital social y los programas de reducción de la pobreza, elaborados como contribución a los debates del Seminario internacional ‘Capital social y programas de superación de la pobreza: lineamientos para la acción’, realizado en Santiago de Chile los días 11 y 12 de noviembre de 2003, con el auspicio del Gobierno de Italia en el marco del proyecto ‘Capital social y reducción de la pobreza: Uso potencial de nuevos instrumentos en política social’ ” (ARRIAGADA, I. 2005, Pág. 10). “... Se han explorado las formas en que el enfoque de capital social puede contribuir a mejorar el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de reducción de la pobreza” (Ibíd., Pág. 15).

7. Res. 2476/10 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En línea: http://www.desarrollosocial.gov.ar/Uploads/i1/ArgentinaTrabaja/Resolucion_2476_2010.pdf

se reconocen como parte de esta población, básicamente, por la imposibilidad de formar parte del sistema laboral formal. Los planes sociales como el programa de ingreso social con trabajo o con los microcréditos de “manos a la obra” permiten a este sector organizado (que además debe acreditarse como cooperativa) paliar la situación de urgencia, y son considerados una manera de trabajar, en tanto prometen empleo para un número importante dentro de la organización, el contrato dura algunos meses o hasta un par de años (como es el caso de la construcción de viviendas), y a través del monotributo social sus beneficiarios se estarían asegurando aportes y asistencia de salud.

A grandes rasgos las medidas que se implementan hace un tiempo prometen la salida de una situación de crisis sanitaria, alimenticia, educativa, social y laboral, a través no solo de la asistencia, sino además mediante un intento de empoderamiento de los sectores más vulnerables, por medio de las organizaciones planteadas más arriba. En todo caso, se puede pensar que en la promoción de un capital social comunitario, las personas tienen la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos de participación y discusión de los asuntos públicos en una mesa de gestión puesta para ello. Esta parece ser una buena iniciativa para la coordinación de acciones conjuntas (con el gobierno y las instituciones públicas y privadas) mediante la gestión de la comunidad. Sin embargo, la disposición es respecto de aquello que aqueja a la comunidad y es posible resolver transitoriamente. Las problemáticas que atraviesan a sectores empobrecidos tienen que ver con cambios estructurales y a largo plazo, pues sus condicionamientos devienen de la falta de empleo estable, educación y salud de calidad. Por lo tanto, las respuestas serán siempre paliativas de una situación de vulnerabilidad creciente. Además, son prácticamente constantes los reclamos por la regularización de personas con becas o planes que se encuentran atrasados o fuera de ellos arbitrariamente⁸.

Los MTD “beneficiarios” de políticas sociales

Entre las diversas lecturas que se hacen acerca de los movimientos de trabajadores desocupados, encontramos análisis que los observan como carentes de autonomía, dado que deben negociar por planes y bolsas de comida (ALMEYRA, 2005), pero por otro, el acceso a esos beneficios les permitiría, además de su subsistencia, el sostenimiento de la organización. MARISTELLA SVAMPA (2009) explica que el contexto en que están inmersas estas organizaciones se constituye por la *urgencia*⁹ porque efectivamente el desempleo y la desestructuración económica de los que son víctimas los colocan en esa situación, pero otro elemento es la *desconfianza*, dado que lo recibido se acaba pronto y

8. La nación.com, sábado 10 de abril de 2012.

9. Cursiva de la autora.

es posible la desmovilización si no se obtienen prontamente recursos nuevos. En relación con esto, MERKLEN (2005) supone que las organizaciones debieron convertirse en “cazadores” de políticas públicas. Esto les requiere conocer sobre los tiempos oportunos y los medios de gestionar los programas. Quienes participan en los movimientos de desocupados han inventado prácticas de trabajar y de vivir, de relacionarse y de integrarse muy distintas de las habituales, que los han llevado a construir una mirada política y social sobre los canales no convencionales.

La posibilidad de conseguir recursos, el acceso a planes y programas, es visto por muchas organizaciones como derecho adquirido y no como prestación asistencial (SVAMPA 2005), pero por otras son, al menos, juzgados. Es así que Emerenciano Sena, líder del grupo que lleva su nombre, critica la existencia de planes considerándolos la estrategia para mantener a los pobres en su pobreza. En el marco de un encuentro de movimientos sociales en marzo de 2011, dijo específicamente: *“Más becas y más asignación por hijo significa seguir siendo pobres por 30 o 50 años más”*.

Este riesgo que también reconoce SVAMPA en la masificación de los planes compensatorios se funda en la cierta posibilidad de convertir a las organizaciones en simples beneficiarias que adhieran a las políticas neoliberales y se hegemonice, a través de mecanismos como son los mediadores, una cultura clientelar muy relacionada con el partido Justicialista y acrecentada durante el Peronismo. La consecuencia de ello sería la despolitización de las organizaciones en tanto estructuras con capacidad de autonomía y de alternativa a las formas instituidas y su consiguiente dependencia total del Estado.

Capital social y MTD

A partir de las categorías mencionadas más arriba, intento observar los MTD, pero es difícil colocarlos dentro de una sola de las formas de capital social. Además, mi interés es aquí operativo, pues esta categorización me es útil para pensar en las experiencias de estas organizaciones y los alcances y perspectivas que promueven en tanto colectivo.

Por empezar, si nos posicionamos en la descripción del Capital Social Comunitario¹⁰, entendemos que un movimiento social implica cooperación, reciprocidad y solidaridad, además de conllevar una identidad basada en la condición social compartida; como elementos que lo constituyen en tanto sirven de base o en momentos difíciles, sino en todo lo que compete a la vida cotidiana y reproductiva del movimiento. Lejos de restringir su alcance solo a la comunidad más próxima, la formación según delegaciones les permite expandirse.

10. Si bien se hace uso de esta tipología para pensar en los objetivos participativos que desarrollan las políticas sociales, me pareció pertinente para aplicarlo al tipo de vínculo y de prácticas que promueven los MTD.

Esta última posibilidad permite superar el tipo de capital social comunitario e ingresar en el segundo modo, el Capital Social de Puentes, que permite al movimiento establecer relaciones horizontales, por ejemplo, con otros movimientos, que se consagran mediante acuerdos y apoyos que se visualizan, por ejemplo, en las movilizaciones. Estos vínculos, tanto estratégicos como solidarios, promueven el mantenimiento del grupo en la escena pública y política (pues si se aislaran perderían fuerza de impacto).

Por último, el Capital Social de Escalera describe las relaciones verticales entre quienes desean los recursos y quienes los detentan. Este tipo de capital es el que ha permitido a los movimientos consagrarse como actores sociales y políticos; la búsqueda constante de diálogo con los gobiernos posiciona a los movimientos como agentes (capitales, dirá MERKLEN, 2005), con quienes el Estado debe discutir, aunque se reconozca que las estrategias de acción directa implementadas por las organizaciones, que en ocasiones son reprimidas, se desvían de las normas institucionales.

“Nos juntamos una vez por mes con el gobernador, un dirigente de cada movimiento, para plantearle al gobernador nuestras necesidades” (I, MIJD-Mecha).

Cuando NUN se preguntaba¹¹ en 1997 “¿qué huelga puede hacer un desocupado?”, con el juego de palabras da cuenta no solo de las condiciones sociales que se precisan para construir ciudadanía, sino que además está considerando que la huelga como derecho ganado por los trabajadores excluye a todo aquel que no tenga esta condición; por lo tanto, tendemos a condenar la protesta considerando que el derecho a ella está negado desde un principio a los desocupados.

Volver sobre el comentario de NUN quince años después nos permite ver cómo los desocupados organizados no solo se permiten reclamar por su inclusión civil, sino además por concretar esa inclusión en términos de ciudadanía social (en función de la descripción que realiza MARSHALL, 2004).

La continua lucha, la permanencia de los MTD en la escena política y social les ha otorgado el desarrollo de un capital social que les permite asumir una posición frente a los gobiernos que excede a la búsqueda de subsidiaridad. Lo primero que logra el movimiento es el (auto) reconocimiento de los derechos de los hombres y mujeres como ciudadanos, es decir que, aunque está fuera una condición ya dada por el hecho de tener el deber de votar, las condiciones para ejercer este derecho plenamente no están garantizadas.

De a poco y mediante una progresiva (auto) instrucción a las formas, estrategias y mecanismos institucionales formales y que competen a los organismos de gestión pública, las organizaciones se han podido incorporar a las agendas de gobierno, en tanto delegados del sector que representan, y pasando del reclamo directo mediante los cortes a la progresiva institucionalización del movimiento. El siguiente recorte da cuenta de ello:

11. Entrevista a JOSÉ NUN “La ciudadanía política no está asegurada si no se dan determinadas condiciones sociales” 8/7/1997 disponible en: <http://www.argiropolis.com.ar/documentos/entrevistas/nun1.htm>

“Tenemos una relación con la CTA ahora y después con la CGT. Hay una relación buena digamos”. Pregunta: ¿Cómo para que ustedes se relacionan? Respuesta: “Para que el compañero se interiorice en lo que es el sindicalismo” (C, MTD Emerenciano).

En este recorte se pueden comprender dos cuestiones: establecer relaciones con organizaciones de fuerte presencia en los ámbitos labores y con experiencia sindical permite a los sujetos apropiarse de la lógica del sindicato, en tanto se proyectan como futuros trabajadores formales; por otro lado, da cuenta de los vínculos estratégicos que se suscitan para promover la institucionalidad del movimiento.

Esto es posible mediante la fuerte organización que diversos grupos han conseguido, las relaciones ganadas y la construcción de una identidad, mediante una conciencia colectiva que permite reconocerse como ciudadanos con derechos que están siendo negados, pero sobre todo como sujetos políticos. En este sentido capitalizan la experiencia acumulada (MERKLEN, 2005). Prueba de ello es la intención de los MTD de convertirse en fuerzas políticas (partidos políticos) que puedan discutir con los gobiernos como con poderes públicos de forma directa y bajo las mismas condiciones.

Pregunta: ¿Deberían integrarse al sistema político? Respuesta: “(de acá) van a salir compañeros preparados porque... porque si le podemos pelear de afuera ¿por qué no le podemos pelear de adentro?” (G, 17 de Julio).

La formalización en un partido político es el modo ideal para intervenir y modificar el espacio político, de ese modo poder discutir y defender a las clases populares desde el lugar privilegiado que ocupan como representantes legitimados por estos sectores.

Los MTD han construido una identidad colectiva desde una perspectiva de comunidad frente a la sociedad racional, en la que se asoma además el proyecto de futuro destacado en la idea de participación directa: la discusión con la sociedad. En representación de su sector desean conformarse como una fuerza política provincial reconociendo que deben ser políticos en un país democrático. Esta postura denota el carácter político que ha ganado la agrupación y el reconocimiento de ellos mismos como ciudadanos con derecho a participar en los asuntos públicos. Al mismo tiempo, valorizan la democracia como forma de gobierno y aceptan sus reglas:

“Hace tres años nos propusimos ir tomando, cada año hacer encuentro de organizaciones sociales, ir encontrando compañeros, ir mirando y creemos que dentro de cuatro años podemos discutir como fuerza provincial, no solamente el 17 de Julio, sino con otros nombres, pero conformando una fuerza provincial para decirle al gobierno que nosotros estamos acá...” (T, 17 de Julio).

De hecho, en las pasadas elecciones otro sector de los MTD (distinto del grupo del recorte anterior) se postuló como partido en las primarias. El MTD Emerenciano, el MIJD-Mecha y el 4 de Abril unieron fuerzas y conformaron el partido Movimiento Social. No consiguieron instituirse como tal, pero dejan asentado un antecedente y posiblemente continuarán apostando a esa posibilidad.

“El objetivo del movimiento es crecer como estamos creciendo, como organización, elevar a nuestros compañeros en conciencia, elevar a nuestros compañeros en inteligencia, que el día

mañana me diga no necesito del gobierno puedo generar mi propio sustento, puedo generar mi propia plata, tener una calidad propia, aprender económicamente esto de la casa, aprender a luchar ambos, sea mujer o marido” (G, 17 de Julio).

Lo visto hasta aquí pone en consideración varias cuestiones. Por un lado, las propuestas de participación de las políticas sociales en el marco de la lucha contra la pobreza buscan la apropiación de parte de las personas y las comunidades de mecanismos y estrategias de autogestión mediante el financiamiento de cooperativas de trabajo —son ejemplo de ello los programas de la línea Argentina Trabaja—, pero también se subsidian otras carencias como la salud y la educación. Por otro lado, se indagó acerca de la posibilidad de los MTD en tanto promotores de un capital social que los posibilita a la discusión política. El concepto de capital social fue aquí utilizado de dos modos. Por un lado, nos referimos a la apuesta desde las políticas sociales de promocionar ciertos capitales sociales (identificados en relación con los vínculos que permiten), para de ese modo intentar garantizar la superación de la pobreza; por otro lado, como aquellas relaciones interpersonales o colectivas que los movimientos analizados ponen en juego a partir de sus experiencias como gestores y “cazadores” de políticas sociales. Sin embargo, no se supone aquí que la relación sea directa y lineal: a ciertas políticas sociales implementadas, cierto capital social conseguido. Al contrario, lo que se intentó mostrar es que las políticas sociales vigentes, si bien muestran avances en la concepción del otro como beneficiario y se proponen objetivos en pos de la organización, de vínculos sociales fortalecidos como de la posibilidad de discutir y opinar sobre las necesidades propias y de la comunidad, no podrán conseguir la superación de la pobreza mientras la política económica no sea su motor. Es decir, mientras no se muestre la pobreza y la desigualdad como una cuestión estructural que solicita cambios en la concepción de equidad y en la redistribución de la riqueza, pero además en el fortalecimiento del sector económico para generar empleos, y no sea preciso un modelo de política social de subsistencia, sino de integración y de equidad real, lo que significa la oportunidad de servicios de calidad.

A modo de cierre

“Tenemos trabajo”, dicen los entrevistados. Están ocupados. Pero estos modos no garantizan seguridad a largo plazo, más bien responden a necesidades inmediatas. Situación que coloca a los sujetos en la incertidumbre, pero además en la expectativa de conseguir participación, de ser incluidos en nuevos programas sociales para ser adjudicados con otras becas o subsidios.

Si bien MELUCCI se está refiriendo a los nuevos movimientos surgidos en Europa en la década del 60/70, la siguiente frase parece calzar con la situación en nuestro país: *“Todas las luchas sociales en la sociedad moderna son luchas que combinan esos dos aspectos: el aspecto de lucha social, del conflicto social en la esfera de producción y el aspecto de la lucha*

de los excluidos por la inclusión en la esfera de la ciudadanía” (MELUCCI, 1999). En este sentido, a los movimientos de trabajadores desocupados, que excluidos del sistema laboral reclaman volver a una situación de asalariado formal, el regreso a una condición de ocupados les devolvería los derechos ciudadanos que les son negados a partir de la desinstitucionalización. Sin embargo, las propuestas desde las políticas sociales hacen un “como si” cumplieran con ambos reclamos. Primero: se consideran los recursos de la gente “humilde” para organizarse, se aboga por el fortalecimiento del capital de los pobres para administrar su subsistencia. Segundo: proponen la organización y la autogestión como condición de la construcción de ciudadanía, devolver la dignidad al trabajador y brindarle derechos. El inconveniente con esta postura es que los resultados se alejan de su ideal. La autogestión de los más humildes significa otorgar fondos y recursos de modo compensatorio, mínimo, lo que para el Estado significa una inversión relativamente baja —si lo comparamos con lo que costaría promover cambios que realmente modifiquen la estructura de desventaja y desigualdad—, pero además, los aportes desde el Estado con financiamiento internacional no permiten la continuidad de un proyecto que realmente propicie la toma de una posición más crítica frente al gobierno. En estos términos se da lo que FALAPPA y ANDRENACCI (2009) reconocen como la política social con función de contención del conflicto social, gestionando el empobrecimiento de los trabajadores.

Frente a esto, los movimientos sociales han ido construyendo una identidad que los reconoce como personas con derechos, pero más aun como actores fuertemente políticos, dado que han tenido que aprender sobre las estrategias políticas y partidarias y han sabido aprovechar los momentos en que los gobernantes los han visto como un capital social (MERKLEN, 2005). Las relaciones sociales y estratégicas que han permitido a los movimientos sociales la posibilidad de constituirse como fuerza popular de discusión con el gobierno y los poderes devienen del análisis político de la realidad y del trabajo concienzudo de sus potencialidades como actores sociales y políticos. La lucha parte de la búsqueda del reconocimiento legal de derechos de ciudadanía, pero acaba instalando la discusión acerca de qué entendemos por ella. -

Bibliografía

- ALMEYRA CÁCERES, Guillermo (2005) Los movimientos sociales en Argentina 1990-2005. Argumentos. Número especial 48-49. Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. Distrito Federal México pp. 43-68.
- ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, SONIA (s/f). “El Discurso de la ‘Participación’ en las políticas sociales de ‘lucha contra la pobreza’, contradicciones y ambivalencias”.
- ANDRENACCI, LUCIANO y SOLDANO, DANIELA (2006). “Aproximación a las teorías de la política social a partir del caso argentino”. En: Andrenacci (comp.)

- Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Los Polvorines, Prometeo.
- BEBBINGTON, ANTHONY (2005). "Capítulo I. Estrategias de vida y estrategias de intervención: el capital social y los programas de superación de la pobreza". En: Arriagada Irma (editora) *Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza*. CEPAL. Chile.
- FALAPPA, FERNANDO y ANDRENACCI, LUCIANO (2009) *La política social de la Argentina democrática (1983-2008)*. Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Biblioteca Nacional.
- FERRAUDI CURTO, MARÍA CECILIA (2007). "Cuando vamos de piqueteros. Una aproximación crítica al concepto de identidad". En: *La sociología ahora*. Siglo XXI editores, Buenos Aires.
- KESSLER, GABRIEL y ROGGI, MARÍA CECILIA (2005). "Capítulo V. Programas de superación de la pobreza y capital social: la experiencia argentina". En: Arriagada Irma (Editora) *Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza*. CEPAL. Chile.
- MASSETTI, Astor (2008) *Cuando los movimientos se institucionalizan. Las organizaciones territoriales urbanas en el gobierno de Buenos Aires*. En: Delamata G. (coord) (2008). *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanía? Reclamos, derechos, estado en Argentina, Bolivia y Brasil*. Editorial Biblos. Bs. As.
- MARSHALL, Thomas (2004) *Ciudadanía y clase social / T. H. Marshall y Tom Bottomore*. 1 ed. 160 p.; 20 x 13 cm. (Cristal del tiempo. Sociedad y política.) Buenos Aires: Losada.
- MELUCCI, ALBERT (2009). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México. México.
- MERKLEN, DENIS (2005) *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*, Buenos Aires, Gorla.
- MONTERO, Maritza (2006). *Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria*. Paidós.
- PEREYRA, SEBASTIÁN y SCHUSTER, FEDERICO (2001) *La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires, Alianza.
- PÉREZ RUBIO, ANA MARÍA (2010) *Los procesos participativos en el contexto de la actual sociedad*. En: Ford, Pinillos, Signorelli, Berdondini (eds.). *Profundizando la democracia como forma de vida. Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI*. Congreso Internacional Rosario 2010. ISBN: 978-950-673-868-6.
- ROMÁN, MAXIMILIANO *La experiencia del MTD 17 de Julio en el Chaco: de la resistencia a la producción (2000-2006)* THEOMAI n° 22, 2010. ISSN: 1515 6443 <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2022/Index.htm>.
- SANTIAGO, FERNANDO (2010). "Políticas sociales: un estudio de caso sobre sus efectos en el capital social comunitario". En: Kessler, Svampa y González Bombal

- (coords.) Reconfiguraciones del mundo popular. El Conurbano Bonaerense en la postconvertibilidad, Los Polvorines, Prometeo-UNGS.
- SARAVÍ GONZALO. Capítulo 1 “Nuevas realidades y nuevos enfoques: exclusión social en América Latina”. En: Saraví, Gonzalo (editor) De la pobreza a la exclusión: continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina. Prometeo Libros, Buenos Aires, Buenos Aires/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2007: México, 2006.
- SVAMPA, MARISTELLA (2005) La sociedad excluyente. Editorial Taurus. Buenos Aires, Argentina.
- SVAMPA, MARISTELLA y PEREYRA SEBASTIÁN (2009). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, 3º Edición, Biblos.